

esta manera el art. 19 de la Constitución federal.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la misma Constitución, se decretó: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 21 de Marzo del presente año, en la que declaró: que la Justicia de la Unión ampara y protege al C. Pascasio Idas, contra los procedimientos del C. Gefe político de Puebla, en virtud de los cuales trata de remitirlo al ejército como desertor, y lo retiene en prision por mas de tres dias, sin los requisitos constitucionales.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de la sentencia presente para los efectos consiguientes; publíquese archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglecias*—*Pedro Ogazon*—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozan*.—*Ignacio Ramirez*.—*H. de Castañeda y Nájera*—*Ignacio M. Altamirano*.—*Simón Cruzman*.—*M. Zavala*.—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Mayo 11 de 1874.—*Enrique Landa*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por el C. Francisco Perez Palacios y Mendiola en representacion de su padre D. Luis Perez Palacios, contra la Direccion general de rentas del mismo Estado, por violacion de las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 17, 20 fraccion 5ª, 21, 22 y 27 de la Constitución federal.

PREMIENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que el C. Francisco Perez Palacios y Mendiola en representacion del Sr. su padre D. Luis Perez Palacios, ha iniciado un recurso de amparo, contra los procedimientos de la Direccion general de rentas del Estado, relativos á la cobranza económica coactiva que le hace por rezagos de las contribuciones causadas desde 1867, por las haciendas del Michate, Apauquesalco y las Huertas, con cuyos procedimientos dice, se han violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 27 de la Constitución de la República.

En el escrito de queja se pidió que desde luego se mandase suspender el acto reclamado, y el C. Director de rentas rindió el informe previendo por el artículo 59 de la ley de 20 de Enero de 1869, diciendo que son falsos los hechos en que se apoya la queja del Sr. Perez Palacios, y pidiendo que se denegara el amparo por improcedente y se impusiera al quejoso por su temeridad, la multa que señala la ley. Pero la suspension inmediata en los recursos de amparo, es solo una medida provisional que tiene por objeto asegurar el juicio de los tribunales, cuya resolucion quedaria inutil por la consumacion irremisible del acto reclamado como anticonstitucional, y evitar que durante la sustanciacion del recurso se

irrogen al quejoso perjuicios graves ó irremparables. En nuestro caso, el procedimiento coactivo se ha llevado ya hasta sacar á pública subasta las haciendas mencionadas, de las que fué rematada la del Michate y no la de Apanquesalco por falta de postores; y como continuando ese procedimiento podía enagenarse también esta última, antes de la resolución definitiva de este recurso, el Promotor pide se mande suspender el procedimiento coactivo para evitar esa enagenación, y se reserve pedir sobre lo principal conforme á la segunda parte del artículo 9º de la citada ley de 20 de Enero.

Cuernavaca, Diciembre 17 de 1873.—
Nicolas Medina.

Es copia que certifico. Cuernavaca, Abril 8 de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Segundo pedimento del O. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Francisco Perez Palacios y Mendiola en representación del Sr. su padre D. Luis Perez Palacios, se ha presentado en este Juzgado de Distrito pidiendo amparo contra el procedimiento económico-coactivo empleado por la Direccion general de rentas del Estado, para hacer efectivos los rezagos de contribuciones que adeuda la Hacienda de Apanquesalco propiedad del quejoso. Dice, que además de que en ese procedimiento se han infringido las leyes fiscales, sin que se observe apenas uno solo de los requisitos establecidos para la cobranza coactiva, se violan con él las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 17, 20 fracción 5ª, 21, 22 y 27 de la Constitución.

El artículo 14 primeramente citado, establece en la parte relativa, que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas á él por el Tribunal que

TOMO VI.—PARTE II.

previamente haya establecido la ley; y se dice violada esa garantía, por que no solamente la Direccion continuó su procedimiento coactivo rematando otra hacienda y terrenos embargados al Sr. Perez Palacios, sino que trata ahora de llevarlo al cabo, siendo así que por la oposicion del causante y por sus recursos al coactor y al Juez de Hacienda, para que reclamara el asunto, este negocio tiene un carácter contencioso, y pertenecía por consiguiente á la jurisdiccion de los tribunales, conforme al artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1837, y al artículo 4º de la ley de 20 de Noviembre de 1838.

Segun los justificantes presentados por el C. Director, documento número 7, el Sr. Perez Palacios, en el acto del embargo, contradijo la liquidacion y protestó contra el procedimiento, alegando que no se le habian abonado algunas cantidades procedentes de ejecuciones anteriores, y que las contribuciones por los terrenos del Michate fueron pagadas por la Hacienda de Oacaleo que los tiene en arrendamiento, comprendidas esas contribuciones en las de elaboracion de azucar y mieles, impuestas á esta última hacienda; y en el escrito de queja se agrega, que el mismo Sr. Perez Palacios presentó un recurso á la Direccion de rentas, pidiéndole que pasara el expediente al C. Juez de Hacienda, por las excepciones que oponia, y ocurrió también al expresado Juez, pidiéndole que reclamara este negocio.

La direccion de rentas, en su informe contesta, que la falta de conformidad del causante con la liquidacion, no basta para considerar el asunto como contencioso; que aun opuesta la excepcion de pago, como no se presentaron documentos comprobantes, no debía suspenderse el procedimiento, y que la direccion habria usurpado atribuciones judiciales, declarando el asunto contencioso; por que ni la ley de 1838 ni su formulario á que ajusta sus procedimientos coactivos, previenen que de oficio se pasen al Juez de Hacienda los asuntos contenciosos. Debo advertir que la misma oficina,

cuando ha querido dar á sus procedimientos un carácter de legalidad suma, ha considerado bastante para remitir el conocimiento de algun negocio al Juez de Hacienda, la simple protesta del causante ejecutalo; en una ejecutoria pronunciada por la Suprema Corte de Justicia, en 8 de Junio de 1873, y que se registra en la página 322 tomo IV del "Semanario Judicial de la Federacion," hay un considerando que á la letra dice: "Considerando: que en el expediente aparece, que Delgado se opuso al pago, diciendo: que la cantidad que se le cobra no era la debida, con lo cual dió lugar á que el punto se convirtiera en contencioso....;" y por último, que aun cuando la ley de 1838 ni su formulario hayan emitido prevenir que se puse al Juez de Hacienda el conocimiento de los asuntos contenciosos, el artículo constitucional invocado solo será acatado cuando se haga así, por que se viola siempre que las autoridades administrativas se ingieren en la materia contenciosa, usurpan las atribuciones judiciales, ó impiden la resolución de los tribunales.

De manera, que aun cuando no haya expresa prevención en el formulario, el Director de rentas no estaba por eso menos obligado á respetar la prohibición que encierra este artículo constitucional; pero si como dice el Sr. Perez Palacios, además de oponer sus excepciones al procedimiento de la Direccion, ocurrió al Juez de Hacienda para que este reclamara el conocimiento del negocio, empleando así todos los medios de defensa y recursos á su alcance, yo ignoro cuando ni como admitirá la Direccion de rentas que los asuntos son contenciosos para que no insista en resolver sobre ellos.

Pero en el informe se dice tambien, que por los documentos justificantes número 27 y 28, se prueba que la Direccion no recibió el oficio en que Perez y Palacios pedia se pasara el expediente al Juez de Hacienda, y esos documentos no pueden servir á lo mas, sino para justificar que se recibió por el quejoso un pliego de la Direccion que

contenia la liquidacion y notificación libradas el 20 de Agosto de 1872; y por el documento número 32, no aparece otra cosa, sino que la Direccion notificó á Palacios que iban á sacarse á remate los terrenos de Apanquezaico, sin que de él pueda sacarse constancia, de si el quejoso repitió ó no su recurso á la Direccion. Queda pues por esclarecer, si el Sr. Perez Palacios dedujo ó no de esa nueva manera sus excepciones, y ocurrió al Juez de Hacienda para que reclamara el negocio.

Se dice violado tambien el artículo 17 de la Constitucion, que prohíbe ejercer violencia para reclamar un derecho, porque no se pasó el negocio al conocimiento del Juez de Hacienda, privando al quejoso de que se resolviera legalmente sobre sus excepciones, y de que pudiera acreditar el pago que alegó, y porque se omitió el segundo requerimiento previo al embargo, y el embargo mismo, al menos con las formalidades prescritas por la ley. En mi concepto es incontestable violencia la que se hace aplicando el procedimiento coactivo á adeudos fiscales, que dejaron de ser indudables desde el momento de la oposicion del causante, y lo es tambien la extralimitacion de sus facultades cometida por una autoridad que reclama el pago de adeudos fiscales, proceda contra un individuo; pero está por probar tambien si en el embargo hubo ó no las formalidades prescritas por la ley, puesto que el Sr. Perez Palacios lo niega terminantemente, y el Director de rentas ofrece con el acta original para el reconocimiento de la firma del quejoso.

Los artículos 16 y 27, se aducen como violados tambien, en la parte que se refieren á la propiedad, por que en virtud de ellos no se puede molestar á un individuo en sus propiedades, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Efectivamente lo previene así el artículo 16, y si el cobro al Sr. Perez Palacios tuvo el carácter de asunto contencioso por la oposi-

cion de sus excepciones, es incontestable que procediendo el Director de rentas á rematar los bienes embargados, extralimitó sus atribuciones, puesto que no es autoridad judicial, y violó tambien esta garantía.

Se pretende violada tambien la garantía del artículo 21, porque se cobran como rezagos mil noventa y siete pesos noventa y cuatro centavos por solo las contribuciones que se cobran por Apanquizado, y conforme al artículo citado, debe esa multa considerarse como pena propiamente tal, y en su aplicacion se han violado tambien las garantías que otorgan los artículos 20 fracción 5ª, y 22, pues ni se ha oido en defensa al quejoso, y como multa es excesiva esa pena; pero se consideran así los recargos reunidos que cobra la Direccion, y cada uno aislado no llega á los quinientos pesos que fija el artículo 21.

De lo expuesto se deduce, que no hay méritos para que desde luego se deseche este amparo, como lo solicita la Direccion de rentas en su informe, sino que debe al contrario otorgarse, si el Sr. Perez Palacios prueba los hechos en que funda su queja, y que serian una violacion indudable de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitucion. Por lo que siendo necesario esclarecer esos hechos, el Promotor pide, se mande abrir este negocio á prueba por un término comun que no exceda de ocho dias, conforme al artículo 10 de la ley de 20 de Enero de 1869.

Cuernavaca, 23 de Enero de 1874.—*Nicolas Medina.*

Es copia que certifico. Cuernavaca, 8 de Abril de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal en el recurso de amparo seguido por el C. Francisco Perez Palacios en representacion del Señor su padre D. Luis del mismo apellido, contra los procedimientos de la Direccion general de ren-

tas del Estado en la cobranza económico-coactiva de rezagos de contribuciones causadas por los bienes del quejoso, su estado supuesto, dice: que la justificacion de V. se ha de servir declarar, que la Justicia de la Union ampara y protege al mencionado Sr. D. Luis Perez Palacios en el goce de las garantías que otorgan los artículos 14, 16 y 17 de la Constitucion federal; pues con el procedimiento reclamado, se violan esas garantías en la persona de aquel Señor, segun consta de los fundamentos legales que paso á exponer.

Abierto este recurso á prueba á peticion del que suscribe, el C. Perez Palacios presentó varios testigos y documentos destinados á justificar, no solo los hechos en que consiste la violacion de las garantías que invoca, sino todas las aseveraciones de su escrito de queja y los fundamentos de su falta de conformidad con la liquidacion que de sus adeudos practicó la Direccion de rentas. Prohibido á los tribunales federales hacer ninguna declaracion general respecto del acto que motiva un recurso de amparo, yo me limitaré á considerar las pruebas que se refieren á la violacion de garantías, desentendiéndome de las otras sobre si se practicó real y legalmente el embargo de bienes, aunque relativamente á los fundamentos que tuvo el quejoso para contradecir la liquidacion, es de advertirse que si de las diligencias y documentos de prueba aparece que no se dedujeron del adeudo el precio de bienes anteriormente embargados al mismo Sr. Perez Palacios, la diferencia entre los resultados de las liquidaciones de fojas 3 y 22, el oficio que en copia obra á fojas 10, y la consulta que segun el documento de fojas 36 hizo la autoridad ejecutora al Gobierno del Estado en 25 de Octubre de 1872, manifiestan que el adeudo de la cantidad que se cobra al quejoso, no era claro é indudable.

He dicho ya que se infringe el artículo 14 de la Constitucion, siempre que las autoridades administrativas, se ingieren en la materia contenciosa é impiden la decision

de los tribunales en los puntos de su competencia, usurpando sus atribuciones; y en nuestro caso la contradicción que hizo el C. Perez Palacios de las liquidaciones de su adeudo, hizo contencioso el derecho de cobrarle y su obligación de pago, y continuando la Direccion el procedimiento económico-coactivo, en su contra violó la garantía del artículo citado.

Por el documento de fojas 24, consta: que en el acto del embargo, el C. Perez Palacios contestó al requerimiento de pago diciendo, que en su concepto nada debía de rezagos; por el de fojas 34 aparece, que en 10 de Agosto de 1873, el mismo Sr. Perez Palacios ocurrió á la Direccion de rentas insistiendo en su oposicion y ratificando su falta de conformidad con la liquidacion; y por el que obra á fojas 99 vuelta y 100, se justifica que en 24 de Julio de 1872 insistiendo tambien en la escepcion de pago, ofreció justificar que los terrenos del Michate nada debían por contribuciones, con la presentacion de documentos legalizados.

Esos documentos hacen prueba plena, por que los dos primeros fueron presentados por la autoridad ejecutora como justificantes de su informe, y el último fué sacado para presentarlo por vía de prueba del expediente de cobranza formado por la misma Direccion de rentas; pero los hechos á que se refieren están corroborados ademas por las declaraciones contestes de los testigos Mariano Abascal, Cruz Sedano y Jesus Jimenez, al contestar la cuarta pregunta del primer interrogatorio (fojas 88 vuelta, 89 vuelta y 91) y aunque de oídas por los testigos tambien Joaquín Prisco, Guadalupe Jimenez y Albino Garcia, conforme al tercer interrogatorio (fojas 89, 90 y 91).

Está pues comprobada la oposicion del Sr. Perez Palacios contradiciendo la liquidacion y ofreciendo comprobar el pago, hecho que debió bastar para la suspension del procedimiento coactivo; pues el negocio tomó desde entonces el carácter contencioso que le hacia de la competencia de los tribu-

nales; y á mayor abundamiento, por el documento de fojas 102 y siguientes se comprueba tambien, que no solo el interesado sino una autoridad judicial pidió á la Direccion que remitiera el negocio á los tribunales del Estado. Se violó por consiguiente, la garantía que asegura la intervencion en los juicios del tribunal competente; y como es propio de un juicio la resolucion de los asuntos contenciosos, la Direccion debió consignar el negocio al Juez de Hacienda, y no verificándolo, continuando sus procedimientos, resolvía de hecho sobre las excepciones del Sr. Perez Palacios.

En los mismos hechos se funda tambien, y por las mismas pruebas está justificada la violacion de la garantía que otorga el artículo 16 del Pacto federal. Efectivamente, si como hemos visto, las autoridades administrativas no deben ingerirse en los asuntos contenciosos, si el C. Director de rentas debió suspender el procedimiento coactivo por la oposicion del Sr. Perez Palacios, la continuacion de ese procedimiento es una molestia injustificada é inferida por autoridad incompetente, prohibida por el artículo citado. Ademas, el procedimiento económico-coactivo, desde el principio fué indebido; pues hemos visto ya que en el se cobraba un adeudo que para la misma Direccion no era claro é indudable, y por consiguiente, el embargo y aun el solo requerimiento de pago, carecian de causa legal y eran tambien molestias prohibidas por el mismo artículo constitucional.

El empleo de la facultad económico-coactiva en caso que no procede; el hecho de rechazar las excepciones del deudor, privar á este de la legítima justificacion de los pagos que alega y el llevar á cabo el procedimiento que debía suspenderse, son inexcusables violencias, que el artículo 17 de la Constitucion prohíbe ejercer en la reclamacion de un derecho. La misma Direccion de rentas violó tambien en el procedimiento reclamado, esa otra garantía.

En mi pedimento sobre lo principal, pro-

curé fundar que no se han violado, y tampoco tenían aplicación en el procedimiento que reclama el C. Perez Palacios, las demás prescripciones constitucionales que superabundantemente invoca aquel Señor en su escrito de queja; pero bastaría con que se hubiese violado una sola de las garantías individuales, para que procediera el amparo de la Justicia de la Union en el goce de esa garantía, impidiendo la ejecución del acto que la restringe ó reponiendo las cosas al estado que tenían antes de cometida la violación.

Por lo qué, con arreglo á la fracción 1ª artículo 101 y al 102 de la Constitución federal, el Promotor fiscal pide, se declare en los términos del principio que repite para concluir.

Otrosí, debe mandarse reponer con el correspondiente, el papel que ocupa este alegato.

Guernavaca, 24 de Marzo de 1874.—*Nicolás Medina.*

Es copia que certifico. Guernavaca, 8 de Abril de 1874.—*Mariano Sansalvador.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guernavaca, Marzo 31 de 1874.—Visto este juicio promovido por el C. Francisco Perez Palacios y Mendiola, en representación de su padre D. Luis Perez Palacios, pidiendo amparo contra la Direccion de rentas del Estado, por haber esta oficina violado en la persona del segundo las garantías de los artículos 14, 16, 17, 20 fracción 5ª, 21, 22 y 27 de la Constitución, con el remate de la Hacienda del Michate, y venta del campo de las Lunas de la Hacienda de Apanquesalco á causa de cobros indebidos de contribuciones por esas fincas y por las de la Huerta que no ha existido; quejándose de que no habiendo estado conforme con la liquidación de adeudos que le fué presentada y constando á la oficina su inconformidad de varios modos, esta llevó ade-

lante los remates sin someter á la decisión judicial el asunto, como era de su deber y lo pedía el quejoso. Resultando, que aunque un comisionado de la Direccion de rentas se presentó á D. Luis Perez Palacios con la liquidación de sus adeudos para que los pagara, este manifestó que creía no deber nada de rezagos por las razones que expuso y constan en la diligencia del embargo (fojas 24,) lo que era bastante para que el negocio se redujese á la prueba judicial, remitiéndose al efecto al Juez competente lo actuado, por que "ningunas providencias coactivas pueden tener lugar, sino tratándose de deudas liquidas," conforme al artículo 39 de la ley de 20 de Enero de 1837, y hecha la traba de ejecución en las fincas responsables del causante, cesaban las funciones de la potestad coactiva y debían pasarse inmediatamente las diligencias practicadas al Juez de Hacienda respectivo, como lo previene el artículo 18 de dicha ley, pues él debe practicar las demás diligencias hasta el remate si este tiene lugar, segun el artículo 18 de la misma. Resultando: que la propia oficina de rentas no estaba del todo cierta sobre el total monto de los adeudos de Perez Palacios, como se vé de su consulta al Gobierno, de fojas 54; y que por el escrito que le transcribió el Juzgado 2º de lo civil de México, debió también dudar sobre el libre ejercicio de sus facultades coactivas, para cuyo esclarecimiento debió remitir como se le indicaba en dicho escrito (fojas 106 y 107,) lo practicado por él al Juez de Hacienda, sin proceder por sí al remate y enagenación de los bienes embargados; que á ello también debieron moverlo las comunicaciones del ejecutado, que corren trascritas á fojas 84 y 100, y la aseveración de que el Michate nada debía, pues por esa finca pagaba la de Oacalco que la tenía tomada en arrendamiento, sobre lo que no se hizo la averiguación que era de hacerse, todo ante la autoridad judicial. Resultando, no habérsele abonado en su cuenta al quejoso todo el valor de los

bueyes, mulas y caña que se le embargó (fojas 82, 88 vuelta, 97, 98 y 99) sino solo una parte de su precio, (fojas 17 y 21) por lo que también era reclamable la liquidación que se le cobraba, y materia de decisión judicial. Que siendo el adeudo del Michate 3068 pesos 93 centavos y por rezagos dudosos 1171 69, (fojas 38 vuelta y 39) ó 1174 69 (fojas 54 y 55) é importando el precio en que se vendió la finca 16679 64, (fojas 38 vuelta,) de los que debió quedar un sobrante como de once mil pesos, se dijo después (á fojas 50) que con la venta de esa finca no se había conseguido lo que adjudaba la misma finca, lo que también hace dudosa la liquidación.

Considerando: que por tales motivos la Direccion de rentas se excedió de sus facultades, avanzando por sí hasta el remate y venta del Michate y campo de las Lunas; y que siendo ilegal este procedimiento, no incurrió el causante en los recargos que por tales actos se le cobraron como pena de suyo excesiva, ni por los adeudos del Michate, si Oacaleo los tenía pagados, segun afirman dos testigos (fojas 92 frente y vuelta).

Considerando: que esa ley de 20 de Enero de 1837, como ley general esta vigente en toda la República, y en ella funda la Justicia federal muchas de sus ejecutorias visibles en el "Derecho," "Semanario Judicial," "Diario Oficial" y "Foro"

Que la de 11 de Diciembre de 71 que la declaró vigente, es también ley general como dada por el Ejecutivo federal investido de facultades extraordinarias sobre los ramos de hacienda y de guerra. Por lo que siendo obligatoria para los Estados la referida ley de 20 de Enero de 37, el no ajustarse á sus disposiciones es traspasar las facultades económicas y vulnerar de ese modo las garantías de los causantes. Habiendo pues conducido así la Direccion general de rentas del Estado, violó con sus procedimientos las garantías de los artículos que invoca el quejoso, menos la del artículo 27, pues no ocupó su propiedad para usos

de utilidad pública. En vista de lo cual, con presencia de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se declara:

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Luis Perez Palacios contra los procedimientos ilegales de la Direccion de rentas del Estado, por que con ellos se le han violado las garantías de los artículos constitucionales por él invocados, menos la del artículo 27 por el cual no lo ampara.

Segundo: notifíquese este fallo al representante del quejoso, y hágase saber al C. Promotor, previniendo al primero reponga el papel que sea de reponer cuando vuelva revisado este fallo.

Sáquense para la prensa las copias de estilo y cévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo decreté y firmé con los de asistencia por falta de secretario.—*Mariano Sansalvador*.—A.—*Donaciano Rodriguez*.—A.—*Porfirio Rodriguez*.

Es copia que certifico. Cuernavaca Abril 8 de 1874.—*Mariano Sansalvador*.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Abril 20 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Morelos por el C. Francisco Perez Palacios y Mendiola en representación de su padre D. Luis Perez Palacios, contra el cobro que le hace el Director de rentas del Estado de la cantidad de once mil noventa y ocho pesos doce centavos, por rezagos de contribuciones de las fincas llamadas el "Michate," "Apanquesalco" y las "Yuerias." Visto el informe justificado de la autoridad ejecutora; la prueba rendida por el quejoso sobre que la liquidación que se le hace es inexacta; las comunicaciones cambiadas entre el Juzgado 2º de lo civil de esta Capital, y la

misma Direccion de rentas del Estado sobre que esta se inhibiera de llevar adelante el remate de esas fincas embargadas, por estar ventilándose un juicio anterior sobre derechos de terceros en ellas, y que siendo el reclamo de esas contribuciones contencioso, remítase la Direccion al Juzgado referido ó al de 1ª instancia de Cuernavaca, el expediente para que en la via judicial se definiesen los derechos que el Estado alega. Visto el parecer fiscal; la sentencia del inferior otorgando el amparo y todo lo demas que de autos consta y se tuvo presente, y

Considerando: que desde el momento en que el cobro que se hace por las haciendas referidas á Perez Palacios se hizo contencioso, es incompetente la Direccion de rentas para ejecutarlo desde luego.

Que por lo mismo no pudo llevar adelante el remate de las fincas sin que previamente se definieran los derechos del Estado, por la autoridad judicial respectiva.

Que el cobro que se hace por rezagos líquidos de contribuciones, no goza de la facultad económico-coactiva.

Que con estos procedimientos se han violado en la persona del quejoso las garantías que reconocen los artículos que invoca; por estas consideraciones y por las propias en que se funda la sentencia del inferior, se decretar: que es de confirmarse y se confirma la referida sentencia, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Luis Perez Palacios, contra los procedimientos de la Direccion de rentas del Estado de Morelos, posteriores al embargo de las fincas mencionadas, dejándose á salvo los derechos de los interesados, en la jurisdiccion del Juez 2º de lo civil de México en los autos de que conoce.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia; publíquese archivándose á su vez el Tomo.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Supre-

ma de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*Ignacio Ramírez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*Ignacio Altamirano*.—*Simon Guzman*.—*M. Zavala*.—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Mayo 8 de 1874.—*Enrique Landa*.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. español José Gomez, contra las disposiciones de la autoridad de Huajuapam, con cuya ejecucion se han violado las garantías individuales consignadas en los arts. 4, 14, 16 y 27 del Pacto federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, alegando para definitiva en el juicio de amparo promovido por el español D. José Gomez contra las providencias del ayuntamiento de Huajuapam, relativas al establecimiento de un arbitrio de tres centavos por la matanza de cada cabeza de ganado lanar ó cabrío, y contra los actos del C. Heimenegildo Leyva, presidente del referido ayuntamiento, dirigidos á hacer efectiva la cuota que al quejoso correspondia por la matanza verificada en su hacienda del Potrero, dice: El Juzgado me permitirá que haga una breve reseña de los hechos. En 5 de Octubre de 1873, el ayuntamiento de Huajuapam decretó el arbitrio municipal mencionado, previa la aprobacion del Superior Gobierno del Estado, y ese decreto vino á ser reformado por otro de Noviembre del mismo año, ó mejor dicho, aclarado y ampliado en el sentido de que las cabezas de ganado causarían el impuesto municipal, aunque la matanza se hiciera fuera del territorio ó demarcacion del mu-